



JOURNAL PROYECTO ÉTICA

Revista académica electrónica del Grupo Proyecto Ética

Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 3072-7359

Vol. 2, núm. 1 (2025) / pp. 63-76

Despenalizar la cabeza. Un enfoque realista y sanitario sobre la problemática de las drogas.

Decriminalizing the Mind. A Realistic and Health-Oriented Approach to the Drug Problem

63

Matias Morón^a
UNLP / UBA

Resumen

La política punitiva prohibicionista global respecto de las drogas, con 150 años de vigencia, ha fracasado rotundamente. No solo no logró mitigar el consumo problemático sino que agravó la situación. Este sistema, al que denomino "prohibicionismo selectivo", permite el consumo y el expendio de sustancias dañinas para la salud como el alcohol y el tabaco, mientras criminaliza otras, generando un negocio ilícito multimillonario. En Argentina, la ley de drogas, con más de treinta y seis años, genera una gran inseguridad jurídica debido a que la penalización de la tenencia para consumo personal sigue vigente a pesar de que ha sido declarada inconstitucional en tres oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello estigmatiza a los usuarios, obstaculiza el acceso a la información y rehabilitación, y mal direcciona recursos estatales hacia la persecución de los eslabones más bajos del narcotráfico. Frente a este fracaso, se proponen modelos alternativos que priorizan la salud pública: la despenalización con políticas accesorias de control de daños (Portugal, Suiza) o la regulación legal de ciertas sustancias (Uruguay). Estas políticas buscan enfocar los esfuerzos en la prevención, la información, la rehabilitación y la persecución de las grandes organizaciones criminales.

Palabras clave: narcotráfico - prohibicionismo - regulacionismo - salud pública - despenalización

Abstract

The 150-year-old global punitive prohibitionist drug policy has resoundingly failed. Not only has it not mitigated problematic drug use, but it has exacerbated the situation. This system, which I call "selective prohibitionism," permits the consumption and sale of substances harmful to health, such as alcohol and tobacco, while criminalizing others, thereby generating a multi-billion dollar illicit business. In Argentina, the drug law, which has been in effect for over 36 years, creates significant legal uncertainty because the penalization of possession for personal use remains in force, despite having been declared unconstitutional on three occasions by the Supreme Court of Justice of the Nation. This stigmatizes users, hinders access to information and rehabilitation, and misdirects state resources towards the persecution of the lowest links in the drug trafficking chain. Given this failure, alternative models that prioritize public health are being proposed: decriminalization with accessory harm reduction policies (Portugal, Switzerland) or the legal regulation of certain substances (Uruguay). These policies aim to focus efforts on prevention, information, rehabilitation, and the prosecution of large criminal organizations.

Key words: drug trafficking - prohibitionism - regulation policy - public health - decriminalization

^a Abog. Matías Morón. Maestrando en Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata. Especialista en derecho judicial por el Consejo General del Poder Judicial de España. Integrante de la Procuración General de la Nación argentina. Ex Relator de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. matiasmorondiduch@gmail.com.

I. Introducción

A lo largo de los últimos 150 años, se ha adoptado –generalizadamente– a nivel global una política para tratar la problemática en torno al uso y abuso de “drogas” que ha fracasado estrepitosamente. Hablamos del *prohibicionismo selectivo*. Este sistema basado en el punitivismo, que prohíbe penalmente el consumo, la tenencia y la venta de ciertas sustancias, no solo no ha podido paliar el consumo problemático de *sustancias psicoactivas*¹, sino que ha agravado la cuestión en varios niveles.

En tal sentido, presenta múltiples inconvenientes y perjuicios que trataremos de enunciar. Afortunadamente, se han implementado –aisladamente– otras alternativas que están orientadas hacia una óptica que privilegia la salud y que resulta menos hipócrita que el sistema que mayoritariamente se aplica. Abordaré estas cuestiones para, finalmente, desarrollar una respuesta superadora para la compleja problemática bajo examen.

II. Algunas consideraciones generales en torno al narcotráfico y las sustancias psicoactivas (drogas)

La problemática que vamos a abordar resulta muy compleja, principalmente, por su magnitud y por la multiplicidad de aristas que presenta. Para empezar, entonces, efectuaré algunas precisiones basadas en fuentes fiables que nos permitan comprender su alcance.

a. Así, por un lado, no podemos soslayar que el consumo problemático de sustancias psicoactivas es una realidad en aumento permanente a nivel local y global. Se estima que a nivel mundial 1 de cada 18 personas consumió alguna sustancia psicoactiva catalogada como ilícita durante el año 2022, lo que representa un incremento del 20% en comparación con una década atrás (UNODC, 2024).

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 275 millones de personas consumieron drogas psicoactivas en 2020 y proyectan que para 2030 esta cifra aumentará. Una proporción significativa de estas personas sufre trastornos derivados del consumo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022).

En 2019, aproximadamente 583.000 muertes fueron atribuibles directa o indirectamente al consumo de drogas (OMS, 2022). A nivel global, el estimado de fabricación de cocaína alcanzó un récord en 2020, con un aumento del 11% respecto a 2019, llegando a 1.982 toneladas (UNODC, 2022). En el sudeste asiático, las incautaciones de metanfetamina alcanzaron un récord de 236 toneladas en 2024, un aumento del 24% respecto al año anterior (UNODC, 2024).

En nuestro país el consumo actual de alcohol se encuentra presente en el 53% de la población adulta, con mayor prevalencia en varones y en el grupo etario de 18 a 24 años (62%) (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina [SEDRONAR], 2024). El 7.8% de la población declaró el uso de marihuana en el último año (11% en varones y 5% en

¹ El término *sustancias psicoactivas* es el que considero más adecuado para referirme a lo que coloquialmente se denominan “drogas”. Según la obra *Sobre Drogas, “son todos aquellos compuestos químicos capaces de cambiar el modo en que funciona la mente mediante la interacción con las estructuras neurológicas, como alterar las sensaciones de dolor y placer, el estado de ánimo, la conciencia, la percepción, la capacidad de pensar y de ser creativos, el estado de alerta y otras funciones psicológicas. El término “sustancias psicoactivas” engloba tanto las drogas lícitas (alcohol, tabaco, cafeína, ansiolíticos, etc.) como las ilícitas (cannabis, LSD, cocaína, heroína, etc.)*” (El Gato y la Caja, 2017). A lo largo de este trabajo emplearé los términos “drogas” y “sustancias psicoactivas” de manera indistinta, comprendiendo las que se consideran lícitas (tabaco, alcohol) como las que no (cocaína, LSD).

mujeres), con un crecimiento del consumo entre 2010 y 2017 en todos los grupos de edad (SEDRONAR, 2024). Según la encuesta conjunta del INDEC y la SEDRONAR de 2022, el alcohol y el tabaco son las drogas más usadas. El 29.2% de los jóvenes entre 16 y 24 años probaron alguna vez marihuana, y el grupo de entre 35 y 49 años es el que más fuma con frecuencia (28.5%) (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] & SEDRONAR, 2022).

b. Por otro lado, cabe destacar que el tráfico ilícito de drogas es la rama del crimen organizado que mayor ganancia genera a nivel global (UNODC, 2005; Kilmer y Liccardo Pacula, 2009). Según la última estimación sobre este punto, la Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen sostuvo que en 2009 el delito organizado generó el 3,6 % del PBI mundial. Dentro de ese total, el narcotráfico fue la actividad ilegal más lucrativa, con ingresos estimados en 321.000 millones de dólares, equivalentes al 0,9 % del PBI global (UNODC, 2011, p. 9).

III. El modelo prohibicionista selectivo. Retrato de su génesis, evolución y fracaso.

Como veremos a continuación, frente a la globalización y la masificación del consumo de ciertas sustancias psicoactivas, la respuesta generalizada del último siglo ha sido prohibir el consumo e intentar solucionar la cuestión a través del derecho penal. Llamamos a ello *prohibicionismo*. Ante el crecimiento del fenómeno, se optó por profundizar este sistema, agravando las penas, marginando a los consumidores y aumentando la persecución a través de las agencias penales de los Estados.

A su vez, denomino a este sistema *prohibicionismo selectivo* ya que algunas de las sustancias psicoactivas que más daño generan en la población se encuentran permitidas, mientras que otras no. Ello responde a comportamientos socialmente aceptados, concepciones estigmatizantes, falta de difusión de cierta información y conveniencia económica de ciertos grupos.

Sin embargo, este sistema no es el que siempre ha imperado. De hecho, al contrario de lo que se suele pensar vulgarmente, durante la mayor parte de la historia de la humanidad las “drogas” no solo estuvieron permitidas, sino que formaron una parte fundamental del entramado social, la cultura, los ritos, la evolución del pensamiento y la vida cotidiana de los diferentes pueblos.

El comienzo más agudo del prohibicionismo, en efecto, se remonta recién hacia 1890, cuando en Estados Unidos se prohibió la producción de opio. Entonces, el Congreso Federal de ese país aprobó una ley que limitó a los ciudadanos norteamericanos la elaboración de dicha sustancia. Según Falcone (2014), en realidad, lo que se perseguía era la prohibición de los chinos que acostumbraban a fumarlo. Esta restricción inicial sobre el uso de sustancias psicoactivas tuvo raíces étnicas, sociales y políticas, siendo la etnofobia uno de los principales motores (Mansilla, 2017).

Poco después, a comienzos del siglo XX, Estados Unidos emprendió una fuerte persecución contra la fabricación, el tráfico y la venta minorista del alcohol, que derivó – incluso –

en una reforma de la constitución norteamericana en 1919 para erradicar dichas conductas². Este período, conocido como la “Ley Seca” (1919-1933) o “Ley de la Prohibición”, se originó en una serie de ideas que buscaban resguardar un determinado estilo de vida, influenciado por el puritanismo religioso de raíz protestante (Mansilla, 2017). A partir de la prohibición de dicha droga y de la utilización del sistema penal para mermar la problemática que traía aparejada, se evidenció –a pequeña escala– el inmenso negocio paralelo que generó y las fuertes consecuencias negativas a todo espectro, lo cual resultó un anticipo de los efectos que hoy tiene la misma política aplicada al resto de las sustancias consideradas ilícitas.

Así, previo a la legalización del alcohol, ya en 1932, John D. Rockefeller sostuvo: “(a partir de su prohibición) en general ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales” (Alcalá, 2023). Este período también fue descrito por Davenport-Hines (2001) como uno que convirtió a los norteamericanos en una nación de infractores, con consecuencias tan desastrosas que provocaron que la prohibición fuera revocada en 1933. Para las organizaciones criminales, la prohibición de las drogas resultó ser un “regalo de los dioses” (Davenport-Hines, 2001).

Siguiendo con la historia de este sistema, en honor a la brevedad, me remontaré a la declarada “guerra contra las drogas” emprendida en la década de 1970 en ese país por el entonces presidente Richard Nixon, quien libró una batalla contra el consumidor (principal enemigo), que era considerado un delincuente. Este modelo se perpetuó y acentuó en los Estados Unidos al punto que el presupuesto inicial destinado por Nixon para combatir el negocio de las drogas fue de 6 millones de dólares, mientras que a principio del año 2000 se destinaron unos 17.800 millones para tal fin (Roosevelt Institute for American Studies, s.f.).

Dicha política se replicó en los diferentes países de Europa y Latinoamérica, y constituyó un estrepitoso fracaso ya que el consumo, la producción, la variedad y el tráfico de las sustancias consideradas drogas ilícitas no ha hecho otra cosa que aumentar, trayendo aparejado un sinnúmero de problemáticas asociadas y efectos colaterales perniciosos para los individuos, las sociedades y los Estados. Así, Falcone sostuvo que:

La política prohibicionista no ha logrado los resultados perseguidos: menor producción, mayores precios y consecuentemente menos consumidores, por la dificultad de adquirir la droga: por el contrario, ha permitido florecer el negocio de los traficantes y su ineludible corolario de corrupción. Esta política de doble moral permite esconderse a quienes más ganan con la criminalización, los traficantes, mientras concentra sus efectos negativos sobre quienes menos recursos tienen en la sociedad. (2014, p. 16)

Como contracara, durante el siglo XXI varios países del mundo han comenzado a transitar otros caminos para abordar el fenómeno de las drogas, regulando algunas sustancias y ensayando políticas públicas menos punitivistas, con el objetivo de reducir los daños asociados al consumo y desarticular el poder de las organizaciones criminales. En este sentido, la regulación del cannabis en Uruguay, la legalización en algunos estados de EE.UU y la despenalización de la posesión para

² Enmienda sancionada el 16 de enero de 1919 por el Congreso estadounidense, presentada por el Senador A.J. Volstead, por la cual se prohibía la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes para bebidas, que se sostuvo hasta el 5 de diciembre de 1933 cuando se ratificó una nueva enmienda por la cual se ponía fin a la llamada “Ley Seca”.

uso personal de todas las drogas en varios países europeos (como Portugal y Suiza) representan ejemplos de un cambio de paradigma en las políticas de drogas a nivel global.

IV. Breves apuntes sobre la situación de la ley penal en Argentina

En Argentina reina una gran inseguridad e ignorancia jurídica sobre la legalidad o no del consumo de drogas: “¿Está permitido consumir? Si es solo un cigarrillo de marihuana no pasa nada. Todo el mundo lo hace”. Esta confusión y falta de conocimiento generalizado reinante se debe a una ley que tiene más de 36 años y que una de sus partes fundamentales (la penalización de la tenencia para consumo personal) ha sido declarada inconstitucional en múltiples oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación³.

Para quienes no sean expertos en el funcionamiento del sistema jurídico argentino, que una ley sea declarada inconstitucional significa que un juez –en este caso el más alto Tribunal Federal– consideró que en cierto caso concreto una ley violentó los derechos y garantías básicos establecidos en nuestra Carta Magna (es decir, que no superó el test de constitucionalidad) y así lo declara. Según nuestro sistema de control de constitucionalidad, ello implica que dicha norma no pueda ser aplicada en ese caso, pero sigue vigente para el resto de los que ocurran. Cuando ello sucede, el juez o tribunal deben dar aviso al Congreso de la Nación para que –en caso de que lo considere– tome cartas en el asunto y derogue esta norma que contradice a la Carta Magna.

En este caso, a pesar de las comunicaciones al Congreso y de un intento fallido en el año 2012, nada cambió. Por lo tanto, la tenencia de estupefacientes para consumo personal (así como todo el espectro de conductas más graves) sigue estando prohibida por la ley, lo que implica que la mera tenencia de una porción –por muy pequeña que sea– de cualquier droga considerada ilícita puede traer aparejada la excitación del sistema penal.

“Pero a un amigo lo detuvo la policía con dos porros y no le pasó nada”. Y es que lo más probable es que, a medida que avanza una causa judicial por la tenencia de una pequeña porción para consumo, ésta se archive en virtud de que los jueces deben seguir lo decidido por la Corte, pero –hasta que ello ocurra– una persona puede ser sometida al control policial, la formación de un expediente penal y el arbitrio de las diversas interpretaciones que se puedan efectuar en instancias judiciales inferiores. Y ello por una conducta que –según el máximo intérprete de la Constitución– resulta repugnante para los derechos y garantías básicos consagrados en la Carta Magna. De ahí la inseguridad jurídica a la que me refería recientemente. A ello, se le suma una pobre política sanitaria, así como de prevención y rehabilitación (¿Cuándo fue la última vez que escuchamos alguna campaña contra el consumo problemático de drogas?).

Para caracterizar la ley vigente en nuestro país resulta interesante el análisis efectuado por Verónica Piñero (Universidad de Ottawa) quien advierte que la legislación argentina vigente en materia de drogas resulta, en algunos puntos, “más restrictiva que lo que las propias convenciones internacionales establecen” (Piñero, 2003).

³ La última vez, por unanimidad de sus miembros en el año 2009 en el famoso Fallo “Arriola” (CSJN, “Arriola, Sebastián y otros s/ RECURSO DE HECHO”, causa n° 9080, de 25 de agosto 2009).

V. Sistemas alternativos al prohibicionismo

Los modelos alternativos al prohibicionismo constituyen una respuesta crítica a los efectos negativos producidos por más de un siglo de políticas de criminalización del consumo y la producción de sustancias psicoactivas. Estos enfoques proponen superar la lógica represiva que, lejos de erradicar el uso de drogas, ha consolidado un mercado ilegal violento, vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y una saturación punitiva del sistema penal, particularmente dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad (Labiano, 2020; Gil Celdrán, 2016).

Desde esta perspectiva, las alternativas al prohibicionismo pueden agruparse en cuatro grandes líneas conceptuales: la despenalización, la legalización, la reducción de riesgos y daños, y la regulación legal del mercado. A su vez, estas estrategias no son excluyentes entre sí y pueden combinarse de manera complementaria, según las particularidades sociales, políticas y culturales de cada contexto.

i. Despenalización

Estos modelos plantean que la posesión de drogas para consumo personal no debe ser objeto de sanción penal. La descriminalización –tal como lo define la OEA (2013) y retoman autores como Damin y Arrieta (2017)–, o más conocida como *despenalización*, implica extraer la conducta del ámbito del derecho penal y ubicarla en el terreno administrativo o sanitario. En este sentido, el caso paradigmático es el de Portugal donde, desde el año 2000 la tenencia para consumo no constituye delito, sino una infracción administrativa que puede derivar en una derivación a tratamiento o a servicios sociales –Ley n.º 30/2000, promulgada el 29 de noviembre de 2000– (Gil Celdrán, 2016), o también Suiza.

Cabe aclarar que en estos Estados el apartamiento del derecho penal no es total, ya que las conductas más preponderantes de tráfico de estupefacientes a gran escala siguen siendo fuertemente reprimidas a través del sistema penal, lo que consideramos una medida atinada. De tal manera, se concentran los esfuerzos en los eslabones altos de la cadena de narcotráfico.

ii. Legalización

La posición liberal más drástica es la legalización que consiste en permitir normativamente el consumo, la producción y el tráfico de sustancias psicotrópicas, apartándose el Estado totalmente de lo que respecta a las drogas. A criterio de quien suscribe no resulta una buena medida ya que implica abandonar una problemática que requiere la intervención estatal para mitigar los daños que provoca el consumo de ciertas sustancias, brindar campañas de información y asistir a quienes tengan un consumo problemático.

iii. Reducción de riesgos y daños

Esta perspectiva parte de una visión pragmática y humanista: dado que el uso de drogas es un hecho social persistente e inevitable, la política debe centrarse en minimizar sus efectos negativos sobre la salud y la vida de las personas, en lugar de perseguir infructuosamente su erradicación. Tal como explican Damin y Arrieta (2017), este enfoque promueve acciones como el acceso a

jeringas estériles, salas de consumo seguro, provisión de naloxona⁴ para prevenir sobredosis y educación basada en evidencia. Lejos de alentar el consumo, estas políticas han demostrado disminuir la mortalidad, el contagio de enfermedades infecciosas y la criminalidad asociada (Damin & Arrieta, s.f.; Fundación Atenea, 2011).

Portugal, cuya política legislativa y sanitaria combinó la despenalización de la tenencia y expendio para consumo personal en los términos ya expuestos y una política de control de riesgos y daños, ha tenido resultados ampliamente reconocidos como exitosos. Solo para citar algunos datos: se logró una disminución de más del 75% en las condenas por delitos de drogas entre 2001 y 2017 (Greenwald, 2009; Transform Drug Policy Foundation, 2018). La proporción de consumidores problemáticos cayó de 100.000 a 33.000 entre 2000 y 2012 (Hughes & Stevens, 2010). La tasa de muertes por sobredosis es de apenas 3 por millón de habitantes, frente a un promedio europeo de 17.3 (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2021). Asimismo, se registró una reducción de más del 50% en los casos de VIH entre usuarios de drogas inyectables durante la primera década de implementación del modelo (Hughes & Stevens, 2010; Cato Institute, 2009; EMCDDA, 2019).

iv. Regulación legal del mercado

La propuesta más estructural es la regulación legal del mercado de drogas, que implica sustituir el control informal de actores ilegales por un control estatal que establezca reglas claras sobre producción, distribución, comercialización y consumo. Según Tabaré Echeverría, la regulación no se reduce a la legalización abstracta, sino que implica diseñar sistemas de control diferenciado por tipo de sustancia, nivel de riesgo, edad de los consumidores y condiciones de acceso (Echeverría, 2017).

En esta línea, Uruguay⁵ se ha posicionado como referente mundial con su modelo integral de regulación del cannabis, que incluye autocultivo, clubes de membresía y venta en farmacias, todo bajo supervisión del Estado (Gil Celdrán, 2016). Así, desde la implementación de la Ley N° 19.172 en Uruguay, se han observado múltiples impactos positivos en términos de salud pública, seguridad y percepción ciudadana. Uno es la percepción favorable por parte de los propios usuarios: según estudios realizados, más del 60% de los consumidores valora positivamente la calidad del cannabis legal en comparación con el ilegal, citando como factores determinantes la seguridad sanitaria, la homogeneidad del producto y la previsibilidad de sus efectos (Boidi, Queirolo & Cruz, 2020).

En el plano social y cultural, también se verificó una transformación significativa. El apoyo ciudadano al modelo ha mostrado una evolución sostenida: mientras que en 2013 sólo el 27% de la población se mostraba a favor de la regulación del cannabis, en 2022 ese porcentaje ascendía al 51%, con especial adhesión entre los jóvenes y personas con nivel educativo medio y alto (Queirolo & Boidi, 2022).

⁴ La naloxona es un antagonista opioide que revierte rápidamente la sobredosis al desplazar a los opioides de sus receptores, restaurando la función respiratoria. Se usa como tratamiento de emergencia.

⁵ A través de la Ley N° 19.172, promulgada el 20 de diciembre de 2013.

En términos de seguridad pública y sistema penal, el impacto también fue notorio. Datos del International Drug Policy Consortium indican que entre 2012 y 2019 se registró una disminución sostenida en las detenciones por posesión de cannabis y en las causas penales asociadas a tenencia, lo que refleja un menor dispendio jurisdiccional y del uso de las fuerzas de seguridad para reprimir ese tipo de infracciones (IDPC, 2021). Complementariamente, se observó una reducción significativa en los delitos asociados al cannabis: entre 2012 y 2018, estos delitos disminuyeron en un 20% (Boidi et al., 2020).

Por último, un informe del Observatorio Uruguayo de Drogas reportó que el mercado ilegal de cannabis se redujo en más del 50% tras cinco años de implementación de la ley, consolidando al Estado como actor dominante del circuito de producción y distribución y reduciendo significativamente la dependencia de los consumidores respecto de actores del narcotráfico (OUD, 2022).

VI. Efectos negativos del prohibicionismo y argumentos en su contra.

Sobre la base de lo expuesto queda claro que a lo largo del último siglo y medio se han intentado diferentes estrategias para reducir el consumo, el narcotráfico y el lavado de activos, así como para paliar sus efectos. Estas estrategias y políticas –como dijimos– en la mayor parte de los Estados se idearon sobre la base del modelo prohibicionista y, a pesar de su estrepitoso y contundente fracaso, las políticas legislativas se han recrudecido en esa dirección, provocando otras consecuencias negativas para los individuos y la sociedad. En otras palabras, la criminalización del fenómeno no ha podido mitigarlo, sino que ha contribuido a su crecimiento y provocado múltiples efectos negativos.

A continuación, efectuaré una enumeración de las consecuencias negativas del actual sistema y los fundamentos por los cuales no lo considero apropiado, ni beneficioso.

i. Consideraciones acerca del consumo problemático

a) La proscripción de las drogas consideradas ilícitas las han tornado más atractivas para jóvenes que no comparten los valores de la sociedad adulta y, por tanto, su consumo opera como un acto de rebelión (Falcone, 2014).

b) No se puede soslayar que el consumo masivo de dichas sustancias es una realidad. El hecho de prohibir estas conductas no hará que los individuos cesen en llevarlas adelante. Así, reconocidos filósofos y sociólogos contemporáneos explican que nos hallamos ante una época en la que el consumo –como fenómeno en sí– está en su máximo esplendor, fomentado y a raíz de distintos factores, y los estupefacientes y psicotrópicos no escapan a esa tendencia (Bauman, 2003; Han Byung Chul, 2010, 2021, 2022).

ii. Consideraciones en torno al individuo y su salud

a) El modelo prohibicionista provoca que los consumidores se sientan marginados y excluidos de la sociedad normal.

b) A su vez, cataloga al usuario como enfermo y al consumidor-vendedor al menudeo como un delincuente⁶. También, este último resulta el principal objetivo de las agencias de seguridad y del sistema penal-penitenciario.

c) Dicha estigmatización produce que los usuarios con consumos problemáticos duden en recurrir a centros de información o rehabilitación, por temor a sentirse juzgados moralmente y al reproche penal que puedan sufrir.

d) Provoca que quienes deciden consumir esas sustancias tengan que recurrir a sitios inseguros para adquirirlas, en los que se exponen a riesgos contra su integridad física o su propiedad.

e) Genera que los consumidores no sepan la procedencia de lo que van a consumir, ni su grado de pureza, lo cual comporta un grave peligro para su salud⁷. Tampoco pueden calcular con exactitud los efectos que les provocarán las sustancias o las dosis que deben ingerir para alcanzar el efecto deseado.

iii. Consideraciones respecto de los efectos en la sociedad

a) El modelo prohibicionista invierte una gran porción del presupuesto y de los recursos de los Estados en perseguir y juzgar a todos los eslabones del narcotráfico. La mayor parte de estos recursos (fuerzas de seguridad y jurisdiccionales) tiene como destinatarios a consumidores que portan estupefacientes y a traficantes de poca monta, de un nivel sociocultural y económico bajo. Asimismo, gran parte de los recursos del sistema penitenciario se destinan a alojar personas que pertenecen a los eslabones medios y bajos de la cadena de tráfico. Estos fondos podrían destinarse a financiar campañas de prevención e información, crear centros de rehabilitación y direccionar el empleo de los recursos humanos y presupuestarios disponibles en perseguir a los grandes traficantes.

b) Provoca que la producción, el transporte y la venta de las sustancias consideradas ilícitas se tornen excesivamente onerosas, por los peligros que comportan para quienes las llevan a cabo, lo que produce enormes ganancias para los eslabones medios y altos de la cadena de tráfico.

VII. Conclusiones. Propuestas para un buen regulacionismo.

i. El consumo masivo de drogas es una realidad que no se puede soslayar. No solo eso, sino que resulta un fenómeno que incrementará. En efecto, por motivos que exceden el objeto de este trabajo, se puede afirmar que en el futuro habrá más usuarios de drogas, tanto lícitas como ilícitas. También es posible aseverar, sin miedo a equivocarse, que la solución que se ha implementado en el último siglo (prohibicionismo) ha fracasado y sus efectos colaterales –lejos de resolver el problema– lo han engrosado y provocado consecuencias calamitosas, tanto para los consumidores como para la sociedad en general.

En este contexto, se torna necesario dar una respuesta diferente, y ello no se debe a que estemos a favor del consumo de drogas o que lo promovamos. Se trata de darle el enfoque que

⁶ Según la UNODC “las personas empobrecidas que no tienen garantía alguna de poder acceder a oportunidades y recursos y al estado de derecho caen más fácilmente en el cultivo, la producción y el tráfico ilícitos de drogas” (UNODC, 2014)].

⁷ En ese espectro, las muertes por sobredosis -al contrario de lo que se suele pensar- no son por sobreconsumo, sino por consumir sustancias con componentes adulterados (sustancias de corte).

consideramos debe tener, principalmente, el asunto: la salud pública. En esa dirección los sistemas de control de daños o regulacionistas parecen los más adecuados.

Políticas por parte de los Estados que enfoquen la mayor parte de sus esfuerzos (y del presupuesto) en la prevención, la información y la rehabilitación de los usuarios o quienes tengan problemas de consumo. Que dejen de marginar a quienes deciden consumir alguna sustancia y que brinden el tratamiento adecuado a quienes lo hacen pero sin elegirlo, sino por necesidad. Quienes son adictos.

Políticas judiciales y policiales que se dediquen a perseguir y a sancionar solamente a quienes lideran las cadenas de narcotráfico que, de por sí, se verían empobrecidas por la desmarginalización y regulación (como sucedió con las bandas que traficaban alcohol en Estados Unidos o quienes lo hacían con cannabis en Uruguay).

Estados que atiendan los grandes problemas profundos –como la desocupación, la pobreza y la marginalidad– que llevan a que una gran cantidad de personas se vuelquen al narcomenudeo como salida laboral o al consumo excesivo de sustancias para escapar a una realidad que les resulta comprensiblemente insoportable.

ii. No hay que viajar a Suiza o a Portugal para ver la aplicación de estas políticas, ya que éstas ya rigen en nuestro país con ciertas sustancias. Tal es el caso del alcohol o el tabaco. En efecto, el consumo y el expendio de dichas sustancias han sido legalizadas y reguladas, sin perjuicio de que generan consecuencias trágicas para la salud de sus usuarios y para la sociedad en general. Hay que señalar que en el caso del alcohol –que por cierto resulta la sustancia más peligrosa de las habilitadas, en varios sentidos⁸– se aplicó una regulación muy laxa (más parecido a una simple legalización)⁹. Así, las restricciones para su venta y consumo son muy pocas, lo mismo que las campañas preventivas (incluso está permitido, y son frecuentes, los anuncios publicitarios que fomentan su consumo).

Con el tabaco se aplicó una regulación más restrictiva¹⁰, estando vedadas las campañas publicitarias que estimulen su consumo, obligándose a las empresas que lo expenden a colocar carteles disuasivos en sus envases y encontrándose prohibido su consumo en lugares cerrados, tanto públicos como privados.

iii. De tal manera, parece que la cuestión versa sobre prejuicios, discursos instalados de lo que resulta correcto o no, información imprecisa y un pensamiento colectivo basado en costumbres y en cierta ética y moral determinada. De este modo, resulta conveniente dar el debate en la mayor cantidad de ámbitos posibles a fin de que se esgriman los fundamentos que motivan las diversas posturas y se pueda generar un nuevo paradigma que responda a lo que resulta más conveniente para los individuos y la sociedad.

⁸ En 2019, el alcohol causó 2,6 millones de muertes en todo el mundo, lo que representa el 4,7% de todas las muertes globales (OMS, 2024).

⁹ Ley N° 24.788, Ley nacional de lucha contra el alcoholismo, 5 de marzo de 1997.

¹⁰ Ley N° 26.687, Regulación de la publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco, 1° de junio de 2011.

iv. Dicho esto, tomando como base las drogas que han sido reguladas y legalizadas (tabaco/alcohol), así como la experiencia de otros países que han optado por sistemas alternativos (Países Bajos, Alemania, Portugal, Suiza y Uruguay), a modo de corolario, expondré algunas pautas para una buena regulación de las sustancias hoy consideradas ilícitas:

- a. Despenalizar el consumo y la tenencia para consumo personal¹¹ de todas las drogas (vgr. Ley n° 30/2000, promulgada el 29 de noviembre de 2000).
- b. Enfocar los recursos humanos y económicos del Estado en perseguir, juzgar y condenar los eslabones altos de las organizaciones criminales destinadas al narcotráfico.
- c. Invertir el presupuesto que se ahorraría a partir de la despenalización de las conductas enunciadas en el apartado 'a.' en campañas de prevención, información y rehabilitación.
- d. Crear centros sanitarios dotados de personal interdisciplinario para usuarios que deseen utilizar drogas –sobre todo las endovenosas– para que lo realicen en un entorno seguro y con materiales esterilizados con los cuales no se contagien de otras enfermedades.
- e. En caso de legalizar y regular algunas de las sustancias hoy consideradas ilegales y que se vendan en puntos seguros (vgr. Uruguay con el cannabis en farmacias), no gravarlas con impuestos muy altos ya que eso favorece el tráfico ilícito y el contrabando (vgr. lo que sucede en Argentina con el tabaco).
- f. Establecer en puntos estratégicos de consumo (vgr. fiestas electrónicas masivas) puestos móviles en los que los usuarios puedan analizar el grado de pureza de la droga que van a consumir, para una ingesta segura (vgr. Países Bajos con el Drugs Information and Monitoring System (DIMS); Suiza con el programa estatal Safe Party (www.Saferparty.ch) o Nueva Zelanda con la ONG KnowYourStuffNZ, que cuenta con la autorización y financiamiento de su Ministerio de Salud).
- g. Realizar estas medidas (hoy por hoy, radicales para nuestro país) dentro de los primeros 100 días de gobierno, que es cuando las autoridades gozan de mayor legitimidad y apoyo popular.

Referencias

- Alcalá, A. (2023, 13 de noviembre). John D. Rockefeller predijo los efectos negativos de la Ley Seca en 1932. <https://espanol.lingolia.com/en/grammar/direct-indirect-articles>
- Alcalá, C. (2023). El día que Estados Unidos anuló la Ley Seca. *El Debate*. <https://www.eldebate.com>
- Bauman, Z. (2003). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.
- Bautista, N., Castro Milanés, H., Rodríguez Huertas, O., Moscoso Segarra, A., & Rusconi, M. (2005). *Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos*. Mediabyte.
- Boidi, M. F., Queirolo, R., & Cruz, J. M. (2020). Public opinion and marijuana legalization in Uruguay: From resistance to support. *Latin American Politics and Society*, 62(3), 1–26. <https://doi.org/10.1017/lap.2020.5>

¹¹ Se debe fijar una cantidad de dosis que son consideradas para consumo personal a los fines que de ello quede al arbitrio de las fuerzas de seguridad o los tribunales.

- Caparrós, E. F. (2018). Capítulo I: Internacionalización del lavado de activos e internacionalización de la respuesta. En I. Blanco Cordero, E. F. Caparrós, V. Prado Saldarriaga, G. Santander Abril, & J. Zaragoza Aguado (Eds.), *Combate al lavado de activos desde el sistema judicial*. OAS.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Smoking & tobacco use: Fast facts. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). (2019). *Derechos humanos en la Argentina. Informe 2019*. CELS.
- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (1988). https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (2004). UNODC. https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. (2000). UNODC. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCbooks.pdf>
- Damin, C., & Arrieta, E. (2017). ¿Qué es la reducción de riesgos y daños? En Varios Autores, *Un libro sobre drogas*. El Gato y La Caja.
- Davenport-Hines, R. (2001). *The Pursuit of Oblivion: A Global History of Narcotics*. W. W. Norton & Company.
- Echeverría, T. (2017). ¿Qué es y cómo funciona una regulación legal de drogas? En Varios Autores, *Un libro sobre drogas*. El Gato y La Caja.
- Editorial del Instituto Roosevelt para los Estudios Americanos. (s.f.). Usted puede vencer a las drogas, Sr. Nixon. <https://www.roosevelt.nl/en/from-the-vaults/you-can-beat-that-drug-mr-nixon-exploring-the-beginning-of-the-war-on-drugs/>
- El Gato y la Caja. (2017). Nacimiento y crisis del prohibicionismo. En *Un libro sobre drogas* (pp. 35-48). Siglo XXI Editores.
- Etcheberry, J. W. (2015). La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. En K. Ambos, D. C. Caro Coria, & E. Malarino (Coords.), *Lavado de activos y compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado*. Jurista Editores.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2019). Portugal: Country drug report 2019. https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2019/portugal_en
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2021). European drug report 2021: Trends and developments. Publications Office of the European Union. https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en
- Falcone, C. (2014). *Drogas: entre el daño y la regulación*. Ediciones Desde la Gente.
- Falcone, R. A., Conti, N. J., & Simaz, A. L. (2014). *Derecho penal y tráfico de drogas* (2.a ed. actualizada y ampliada). Ad-Hoc.
- FATF–GAFILAT. (2020). *Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado del financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva*. FATF.
- Fundación Atenea. (2011). *Regular: la única opción viable*. En Boletín Athenai No 55.

- Gil Celdrán, A. (2016). *Modelos de regulación de drogas. Un estudio cualitativo del debate* (Trabajo final de grado). Universidad de Granada.
- Greenwald, G. (2009). Drug decriminalization in Portugal: Lessons for creating fair and successful drug policies. Cato Institute. <https://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal>
- Han, B. C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Han, B. C. (2021). *Psicopolítica*. Herder.
- Han, B. C. (2022). *Capitalismo y pulsión de muerte*. Herder.
- Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6), 999–1022. <https://doi.org/10.1093/bjc/azq038>
- IDPC – International Drug Policy Consortium. (2021). Cannabis regulation in Uruguay: Lessons and challenges. <https://idpc.net/publications/2021/03/cannabis-regulation-in-uruguay-lessons-and-challenges>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) & Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). (2022). Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Hogares de Centros Urbanos.
- Kilmer, B., & Reuter, P. (2009). Prime numbers: Doped. *Foreign Policy*, (November–December), 34-35.
- KnowYourStuffNZ. (2021). Annual report 2020–2021. <https://knowyourstuff.nz>
- Labiano, V. (2020). Estilos estatales de regulación de las drogas ilegales en Sudamérica. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(240), 89–118.
- Labiano, V. (2022). La persistencia de la penalización de la tenencia de drogas ilícitas para uso personal en Argentina. *POSTData*, 27(2), 305–345.
- Mansilla, H. C. F. (2017). *Breve historia de las drogas*. Fondo de Cultura Económica.
- Mansilla, J. C. (2017). Nacimiento y crisis del prohibicionismo. En AAVV Varios Autores, *Un libro sobre drogas*. El Gato y La Caja.
- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). (2023). Alcohol facts and statistics. <https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/alcohol-facts-and-statistics>
- Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional, & Organización de los Estados Americanos (OEA). (2019). Prevalencia de trastornos de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia.
- Observatorio Uruguayo de Drogas. (2022). Informe sobre el mercado de cannabis en Uruguay. Junta Nacional de Drogas. <https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas (EB Documento Formato A75/43). https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_43-sp.pdf
- Piñero, V. (2003). Convenciones internacionales sobre estupefacientes y legislación argentina en materia de conductas asociadas al consumo recreacional y personal de drogas. Canadian Research Chair in Legal Traditions and Penal Rationality – University of Ottawa.

- Queirolo, R., & Boidi, M. F. (2022). Ten years later: Assessing the Uruguayan cannabis model. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/ten-years-later-assessing-the-uruguayan-cannabis-model/>
- Roosevelt Institute for American Studies. (s.f.). *You can beat that drug, Mr. Nixon! Exploring the beginning of the War on Drugs*. Recuperado de <https://www.roosevelt.nl/en/from-the-vaults/you-can-beat-that-drug-mr-nixon-exploring-the-beginning-of-the-war-on-drugs/>
- Russo, D. (2022). Sobre el uso de drogas en la historia y sus regulaciones antes del prohibicionismo. *Salud Mental y Comunidad*, 9(12), 49–67.
- Saferparty.ch. (2023). Aktuelle Warnungen. <https://www.saferparty.ch>
- Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). (2024, septiembre). Informe sobre consumo de drogas en la población de 12 a 65 años en Argentina.
- Transform Drug Policy Foundation. (2018). How Portugal ended the war on drugs. <https://transformdrugs.org/publications/how-portugal-ended-the-war-on-drugs>
- Trimbos Institute. (2021). Annual report DIMS 2020. <https://www.trimbos.nl/kennis/dims>
- UNODC. (2005). World drug report 2005. Volume 1: Analysis. https://www.unodc.org/pdf/WDR_2005/volume_1_web.pdf
- UNODC. (2011). Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
- UNODC. (2022). World Drug Report 2022. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- UNODC. (2023). Informe mundial sobre las drogas 2023. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_ExSum_Spanish.pdf
- UNODC. (2024). World Drug Report 2024. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Varios Autores. (2017). *Un libro sobre drogas*. El Gato y La Caja.
- WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). (2021). Global progress report on implementation of the WHO FCTC. <https://fctc.who.int/>
- World Health Organization (WHO). (2018). Global status report on alcohol and health 2018. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639>
- World Health Organization (WHO). (2024). Alcohol and drug use cause over 3 million deaths every year, mostly among men. <https://www.who.int/news/item/25-06-2024-over-3-million-annual-deaths-due-to-alcohol>